

**Consejo de Seguridad**

Distr. general
4 de mayo de 2005
Español
Original: inglés

**Carta de fecha 3 de mayo de 2005 dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo
de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)
relativa a la lucha contra el terrorismo**

Tengo el honor de referirme a la carta de mi predecesor de fecha 23 de febrero de 2005 (S/2005/114). El Comité contra el Terrorismo ha recibido el quinto informe de Egipto, adjunto, que se ha presentado con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo). Le agradecería tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Ellen Margrethe Løj
Presidenta del Comité del Consejo de Seguridad
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)
relativa a la lucha contra el terrorismo



Anexo

Nota verbal de fecha 29 de abril de 2005 dirigida a la Presidenta del Comité contra el Terrorismo por la Misión Permanente de Egipto ante las Naciones Unidas

La Misión Permanente de la República Árabe de Egipto saluda atentamente a la Presidenta del Comité contra el Terrorismo y tiene el honor de someter adjunto el quinto informe presentado por el Gobierno de Egipto, en respuesta a las preguntas del Comité por las que se solicitaba más información sobre las leyes y reglamentaciones de Egipto (véase el apéndice).

Apéndice

[Original: árabe]

Comité Nacional sobre la cooperación internacional para combatir el terrorismo

Respuestas a preguntas relativas al cuarto informe de Egipto sobre las medidas dirigidas a combatir el terrorismo, que se presentó al Comité contra el Terrorismo en cumplimiento de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad

1. Medidas de aplicación

1.1 En la página 13 del cuarto informe de Egipto se hace referencia a un proyecto de ley sobre el fortalecimiento del régimen jurídico de la asistencia judicial internacional en materia penal. El Comité contra el Terrorismo quedaría agradecido si Egipto le suministrara información actualizada sobre la situación del proyecto de ley e información sobre cualquier otra medida adoptada por Egipto para fortalecer su capacidad de lucha contra el terrorismo y sobre las modalidades de cooperación con otros Estados para combatir el terrorismo.

Respuesta

La Sección de cooperación internacional del Ministerio de Justicia ha completado la preparación de los principales puntos del proyecto de ley sobre cooperación judicial internacional en materia penal. Esos puntos fueron objeto de un debate a fondo en una reunión del Comité creado en virtud de una decisión del Ministro de Justicia y a la que asistieron los miembros del Comité, es decir, representantes de las autoridades competentes y expertos en cuestiones penales. El Comité aprobó los puntos mencionados. El proyecto de ley se examinó en el contexto de las actividades del Comité nacional sobre la cooperación internacional para combatir el terrorismo. Ambos comités consideraron importante que las disposiciones del proyecto de ley estuvieran en consonancia con las disposiciones de los instrumentos internacionales, y en particular con los relativos a la lucha contra el terrorismo. Se prevé que la redacción del proyecto de ley quedará finalizada en el futuro próximo, tras lo cual podrá ser presentado a las autoridades competentes a fin de que adopten medidas para su remisión a la Asamblea Popular y al Consejo Consultivo (Shura) al comienzo de sus próximos períodos de sesiones.

Cabe señalar que el proyecto de ley sobre cooperación judicial internacional en materia penal tiene las siguientes características:

a) Comprende los distintos procedimientos requeridos por la cooperación judicial internacional. En otras palabras, no se limita a la extradición sino que incluye también exhortos dirigidos a autoridades egipcias y extranjeras, la ejecución de fallos extranjeros y el traslado de condenados. Además, el proyecto de ley contiene nuevas disposiciones relativas a la extradición a un Estado extranjero de delincuentes que están en Egipto y la devolución de delincuentes a Egipto por un Estado extranjero. Incluye también nuevas técnicas para el cumplimiento de exhortos en las que se tiene en cuenta la rapidez con que esto puede llevarse a cabo mediante la Internet y se trata la cuestión del secuestro de objetos relacionados con el delito que están en posesión de los delincuentes y sobre la manera de disponer de ellos;

b) En el proyecto de ley se consideran las cuestiones de la colaboración y la cooperación con los tribunales penales internacionales establecidos en virtud de convenios, convenciones o resoluciones internacionales que estén en vigor en Egipto y se establece la licitud de la cooperación con otros tribunales penales internacionales, en particular los tribunales penales internacionales para Rwanda y la ex Yugoslavia, con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas;

c) El proyecto de ley consta básicamente de ocho secciones, a saber: disposiciones generales, exhortos, extradición de personas y entrega de objetos, traslado de procedimientos penales, reconocimiento y aplicación de fallos penales, traslado de personas condenadas y cooperación con tribunales penales internacionales.

Las medidas adoptadas recientemente por la República Árabe de Egipto con relación a su capacidad contra el terrorismo comprende lo siguiente:

- El Comité nacional sobre la cooperación internacional para combatir el terrorismo realizó un estudio de dos convenios, el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, a fin de examinar en qué medida sería apropiado adherirse a ellos. El Comité recomendó la adhesión y actualmente se están tomando medidas para la ratificación definitiva de los convenios;
- El 25 de julio de 2004 el Comité nacional sobre la cooperación internacional para combatir el terrorismo se reunió con miembros del Equipo de Vigilancia del Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) y consideró maneras de colaborar con el Comité nacional en la lucha contra el terrorismo. Se hizo un examen de los esfuerzos realizados por Egipto en las esferas de la legislación y la aplicación conexas y la remoción de todos los obstáculos que se oponen a las peticiones de extradición de las personas acusadas de cometer delitos terroristas;
- El Ministerio de Justicia de Egipto ha celebrado numerosas reuniones bilaterales y ha coordinado su labor con numerosos Estados europeos, africanos y árabes con miras a concertar acuerdos y memorandos de entendimiento sobre la cooperación judicial internacional en materia penal, incluido en el ámbito de la lucha contra el terrorismo;
- Los días 27 y 28 de septiembre de 2004, el Comité nacional sobre la cooperación internacional para combatir el terrorismo celebró una reunión con una delegación del Departamento de políticas contra el terrorismo del Reino Unido con miras a fortalecer y consolidar las relaciones de cooperación legal y judicial entre los dos países, especialmente en la esfera de la lucha contra el terrorismo;
- El 2 de octubre de 2004, el Ministerio de Justicia recibió al Sr. Antonio María Costa, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (ONUV) y Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), y el Sr. Jean-Paul Laborde, Jefe de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la ONUDD. Se celebró una reunión entre ellos y el Comité nacional sobre la cooperación internacional para combatir el terrorismo, en la cual se consideraron modos de cooperación entre Egipto y las Naciones Unidas en la esfera de la lucha contra la delincuencia organizada en todas sus formas, incluidos los delitos terroristas;

- El 16 de febrero de 2005 el Comité nacional sobre la cooperación internacional para combatir el terrorismo recibió al Sr. Javier Rupérez, Director de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo. Se examinaron las medidas adoptadas por la República Árabe de Egipto para combatir el terrorismo y el Sr. Rupérez se refirió a la función que podría desempeñar la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo en la asistencia a los Estados para combatir el terrorismo;
- Los días 21 y 22 de diciembre de 2004, el Ministerio de Justicia organizó un seminario regional sobre la definición de los mecanismos jurídicos para combatir el terrorismo. Las recomendaciones del seminario se refirieron, en particular, a las siguientes cuestiones:
 - Preocupación por desarrollar la legislación en la esfera de la cooperación judicial internacional; esfuerzos legislativos permanentes para mantenerse al tanto de las novedades internacionales en la materia; ratificación por la República Árabe de Egipto de las medidas para impulsar los instrumentos internacionales y regionales sobre la lucha contra el terrorismo, mediante la aprobación de la legislación apropiada, con el auxilio de la guía preparada para ese fin por la ONUDD (adición I);
 - Beneplácito por el establecimiento en El Cairo de un centro regional para la región del Oriente Medio y África Septentrional, en el marco de la ONUDD, con el objeto a prestar asistencia a las actividades de los países de la región dirigidas a la aplicación de las disposiciones de los convenios, convenciones y protocolos internacionales sobre la delincuencia transnacional organizada y el terrorismo;
- Egipto participó en el Simposio regional árabe sobre la lucha contra el terrorismo, celebrado en El Cairo en el marco de la Liga de los Estados Árabes los días 16 y 17 de febrero de 2005, así como en la Conferencia Internacional contra el Terrorismo, celebrada en Riad del 5 al 8 de febrero de 2005, y desempeñó un activo papel en la redacción de las recomendaciones del Simposio y la Conferencia;
- Además de lo que antecede, Egipto está en contacto permanente con diversos Estados de todo el mundo con miras a intensificar la colaboración en la lucha contra el terrorismo, especialmente mediante la concertación de acuerdos sobre cooperación judicial que garanticen la extradición y el procesamiento de los delincuentes y condenados y las personas buscadas, o por lo menos brinden el mayor grado posible de transparencia en el intercambio de asistencia e información en materia judicial y de seguridad. Se han hecho considerables progresos al respecto, discernibles principalmente en la concertación de un cierto número de acuerdos bilaterales con diversos países europeos y africanos, tales como Hungría, Polonia, Rumania, Italia, Sudáfrica y Ucrania, además de los acuerdos de cooperación con los países árabes.

1.2 El Comité contra el Terrorismo ha tomado nota de que, en relación con el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, Egipto ha codificado disposiciones análogas en su legislación interna. El Comité contra el Terrorismo agradecería que Egipto le proporcionara información actualizada sobre el proceso en curso para llegar a ser parte en el Convenio.

Respuesta

Se ha publicado una decisión del Presidente de la República, No. 426 de 2004, referente a la ratificación del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, que fue firmado en Nueva York el 10 de enero de 2000. El Convenio fue ratificado por la Asamblea del Pueblo en su sesión de 1º de febrero de 2005 y el instrumento de ratificación se halla en curso de ser depositado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (adición 2).

1.3 El Comité contra el Terrorismo ha tomado nota también de que Egipto no es aún parte del Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas y la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares. El Comité contra el Terrorismo agradecería que Egipto le proporcionara información actualizada sobre el proceso que está teniendo lugar para ser parte en esos instrumentos. En relación también con esos instrumentos, el Comité contra el Terrorismo desearía una aclaración de la referencia que figura en las páginas 5 y 8 del cuarto informe de Egipto, a saber, que con arreglo al artículo 151 de la Constitución egipcia, los convenios ratificados por Egipto automáticamente se convierten en ley. Sin embargo, dado que esos instrumentos no son aplicables directamente, el Comité contra el Terrorismo quedaría reconocido si Egipto le informara si existen disposiciones de su legislación interna que correspondan a las disposiciones de los instrumentos mencionados.

Respuesta

Con respecto al Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, actualmente se están adoptando medidas para presentarlo a la Asamblea del Pueblo en el curso del próximo período de sesiones.

Si bien la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares se halla aún en estudio por las autoridades competentes, Egipto ha adoptado varias medidas al respecto, tales como su adhesión al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares en 1981 y la firma de un acuerdo de salvaguardias nucleares con el Organismo Internacional de Energía Atómica en 1982, además de diversas medidas legislativas, de seguridad y de vigilancia, como se indica a continuación.

I. Medidas de seguridad y vigilancia

En consonancia con los esfuerzos del Estado por combatir el contrabando de fuentes radiactivas y garantizar que tales fuentes (y en particular las fuentes radiactivas selladas, muy usadas en la industria y la medicina) no caigan en manos de grupos terroristas, los distintos servicios egipcios aplican actualmente procedimientos idóneos para la vigilancia intensiva de la circulación de materiales nucleares, químicos y biológicos, según el siguiente detalle:

1. Ejecución, que está llevando a cabo actualmente la Autoridad de Energía Atómica, por intermedio del Centro Nacional de Seguridad Nuclear y Control de Radiaciones, del Programa de Gestión Integrada “del principio al fin”, en colaboración con los Sandia National Laboratories de los Estados Unidos. Este programa comprende la utilización de una base de datos en que se especifique si los materiales siguen estando o no en uso, y que incluye, para esas fuentes radiactivas, los documentos de importación conexos, el tipo y la intensidad de las fuentes, los lugares en

que se usan, los medios utilizados para su transporte y almacenamiento, los responsables de ellas y los sistemas conexos de protección física. Además, los sistemas de protección física de fuentes radiactivas, especialmente las de radiactividad elevada, son examinados por las personas competentes de la Autoridad y se determina si dichos sistemas se ajustan a las normas internacionales, todo lo cual se efectúa en colaboración con el Ministerio de Salud. También de conformidad con el Programa, las fuentes radiactivas se reciclan para volver a utilizarlas, si es posible, o se hace lo que sea necesario para enterrarlas en condiciones seguras después de haberlas preparado siguiendo métodos técnicamente adecuados. Además, la Autoridad, por conducto del Centro Nacional de Seguridad Nuclear y Control de Radiaciones, lleva a cabo todas las actividades relativas a la prohibición de materiales nucleares y a la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con arreglo al Acuerdo amplio de salvaguardias concertado entre Egipto y el Organismo en 1982;

2. Adopción de medidas para prevenir los intentos de importar o introducir mediante contrabando armas y explosivos de todas clases, y como sigue:

- Se realizan controles de seguridad sobre las personas, equipajes y artículos conexos y respecto de vehículos automotores, utilizando equipo tecnológicamente avanzado (arcos de detección electrónicos para las personas, equipo de rayos X para inspeccionar equipajes, espejos y tubos flexibles para inspeccionar vehículos);
- Las mercancías y otros artículos están sujetos a los controles de seguridad apropiados realizados por el Comité establecido por los servicios competentes para la inspección de mercancías, el control de cargas y las inspecciones de seguridad realizadas por medio de equipo de rayos X para la detección de explosivos y perros adiestrados para detectar explosivos;
- Se realizan controles de seguridad y aduanas a fondo en los cargamentos de buques y aeronaves, los que se inspeccionan con fines de seguridad utilizando equipo de detección de explosivos y perros adiestrados para detectar explosivos;
- Es preciso señalar que estos controles y procedimientos están conformes con las normas reconocidas internacionalmente, a saber, el anexo de seguridad No. 17 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, publicado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); el Código internacional de seguridad de buques e instalaciones portuarias (código ISPS), aprobado por la Organización Marítima Internacional (OMI) en el marco del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar;

3. Adopción de medidas eficaces para reforzar el control de los movimientos de embarques de materiales peligrosos y productos químicos clasificados como explosivos, de conformidad con lo siguiente:

- La decisión ministerial emitida para definir los materiales explosivos y la lista anexa;
- La legislación de aduanas promulgada para reglamentar el despacho de aduanas de tales materiales;
- El código internacional de materiales peligrosos, que enumera 350 materiales considerados peligrosos;
- Las pertinentes disposiciones estándar de la OACI y la OMI;

4. Una evaluación amplia de las disposiciones relativas a un control más estricto de la circulación de materiales peligrosos y productos químicos clasificados como explosivos, por medio de lo siguiente:

- La participación de un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en las tareas de inspección de las dependencias de la Organización General de Control de Exportaciones e Importaciones (GOEIC) en todos los puntos de ingreso o egreso legal del país para garantizar el cumplimiento de la decisión ministerial sobre materiales explosivos y su lista anexa acerca de los embarques de materiales y productos químicos peligrosos;
- El análisis, efectuado por la GOEIC, de todos los embarques entrantes de muestras y productos químicos para los cuales no se ha suministrado una denominación científica que permita identificar su contenido, establecer su nombre científico y determinar si se clasifican o no como materiales explosivos, en la inteligencia de que la denominación científica deberá incorporar todos los detalles incluidos en el código internacional de materiales peligrosos, a saber:
 - Número de riesgo (número de las Naciones Unidas);
 - Clase;
- En caso de violación de las decisiones y reglamentaciones que rigen la circulación de explosivos, y habiéndose determinado que el material importado comprende explosivos mencionados en la lista anexa a la decisión ministerial a que se hace referencia más arriba, realización de un nuevo análisis del material por el laboratorio de actividades delictivas con miras a la publicación de un informe técnico al respecto a fin de que puedan adoptarse las medidas legales del caso;
- La adopción de las siguientes medidas por parte del Ministerio de Transporte (Sector de Transporte Marítimo y Autoridad General para los Cruces Fronterizos Terrestres) y el Ministerio de Aviación (Autoridad de Aeropuertos):
 - Preparar sectores adecuados para recibir y almacenar los productos químicos y materiales peligrosos de conformidad con el código internacional de puertos (mar/aire/tierra) que satisfagan los requisitos preventivos para salvaguardar materiales y ejercer un control estricto sobre ellos;
 - Exigir a las agencias de transporte de cargas que presenten las especificaciones técnicas de los materiales peligrosos que se despachen a un puerto de destino determinado y obtener permisos de la autoridad de puertos antes del embarque desde el puerto de exportación y examinarlos de conformidad con el código internacional de materiales peligrosos;
 - No permitir la descarga de buques, aeronaves u otros medios de transporte en los puertos de destino de materiales explosivos o productos químicos clasificados como explosivos ni la expedición de permisos o el transporte de esos materiales excepto previa autorización de los servicios de seguridad competentes;
 - Incautar, por intermedio de los servicios de la autoridad de control, los productos exportados e importados en los puertos cuando se sospeche que los embarques pueden contener explosivos o productos químicos o materiales considerados como tales y entregar al laboratorio de actividades delictivas de la oficina de investigación criminal muestras para su análisis y para la preparación de un informe técnico como procesos previos a la adopción de medidas legales al respecto;

5. La Autoridad General de Puertos, en cooperación con la Autoridad de Energía Atómica, ha establecido arcos de detección de materiales radiactivos en diversos puertos. Actualmente se está completando el sistema, que se instalará en otros puertos marítimos en el futuro.

II. Medidas legislativas

1. La Ley No. 59 de 1960 sobre las actividades en que se utilizan radiaciones ionizantes y la protección contra sus riesgos (artículos 1 y 2) limita el uso y la posesión de materiales radiactivos a las organizaciones que realizan actividades en esa esfera y que satisfacen las condiciones de total control de conformidad con las leyes y reglamentos en vigor (adición 3).

2. La Ley No. 4 de 1994 sobre la protección del medio ambiente (artículos 29, 31 y 32) prohíbe la circulación de materiales y desechos peligrosos o la construcción de instalaciones para el tratamiento de desechos peligrosos sin permiso de las autoridades administrativas competentes y el Organismo egipcio de cuestiones relativas al medio ambiente. La Ley dispone además, que la eliminación de desechos peligrosos debe hacerse de conformidad con las condiciones y normas definidas en las disposiciones reglamentarias de la Ley. El Ministro de Vivienda, después de celebrar consultas con los Ministerios de Salud e Industria y el Organismo de cuestiones relativas al medio ambiente, determina los lugares y condiciones para el otorgamiento de permisos para la eliminación de desechos peligrosos, con sujeción a procedimientos de estricta seguridad y vigilancia (adición 4).

El artículo 32 de la misma ley prohíbe también la importación de desechos peligrosos y el otorgamiento de permisos para su ingreso al territorio del Estado o el tránsito por dicho territorio. Se prohíbe también el paso de buques que transporten desechos peligrosos por las aguas territoriales o la zona económica exclusiva sin contar con un permiso de la autoridad administrativa competente. Debe mencionarse que en la nota explicativa de la ley mencionada se establece que, habida cuenta de los peligros que implica la manipulación de desechos peligrosos, la importación de tales desechos y el otorgamiento de permisos para su introducción en la República Árabe de Egipto o el paso por la República están absolutamente prohibidos.

Otras cuestiones

1. En el contexto de los trabajos de la Conferencia de Desarme de Ginebra, Egipto ha realizado gestiones encaminadas al comienzo de las negociaciones sobre un tratado relativo a materiales fisiónables (en existencia o futuros);

2. Los esfuerzos de Egipto en el marco de la Coalición para el Nuevo Programa, que tiene por objeto librar al mundo de armas nucleares, y la aprobación de una resolución al respecto para su presentación a la Asamblea General en nombre de los países que integran la coalición;

3. Participación de Egipto en la Conferencia de asociados internacionales de la iniciativa para la reducción de la amenaza mundial, celebrada en Viena en septiembre de 2004;

4. Participación de Egipto en el grupo de trabajo establecido por el Director General de la OIEA para el estudio del ciclo del combustible nuclear y de la forma de controlarlo;

5. Esfuerzos emprendidos por Egipto, desde 1974, para librar a la región del Oriente Medio de armas nucleares y presentación de un proyecto de resolución en ese sentido a la Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

6. Iniciativa presidencial para librar al Oriente Medio de armas de destrucción en masa y actividades dirigidas a movilizar esfuerzos internacionales y regionales al respecto.

En lo concerniente a la referencia al artículo 151 de la Constitución de Egipto y el hecho de que las convenciones o convenios ratificados por la República Árabe de Egipto se incorporen al derecho egipcio, debe señalarse que, si bien la norma fundamental del sistema jurídico egipcio es que las convenciones o convenios adquieren fuerza de ley tan pronto se ratifican y son aplicables internamente con arreglo al artículo 151 de la Constitución de Egipto, lo que supone la posibilidad de su aplicación directa por los jueces, la adhesión a sus normas y el requisito de que sus disposiciones deben ser respetadas por todas las autoridades, la aplicación y puesta en vigor de las disposiciones de tales convenciones o convenios depende de la naturaleza de las normas del propio convenio, convención o tratado. Las convenciones o convenios que incluyen disposiciones sobre penalidades, por ejemplo, requieren la redacción de legislación por la que se defina el carácter de tales penalidades y de los actos delictivos de conformidad con el principio de la legitimidad en materia penal. Egipto ha aprobado muchas leyes en las que se establecen penalidades para actos especificados en convenios o convenciones internacionales, como en el caso de las convenciones o convenios relativos al terrorismo. En el Código Penal de Egipto y en otras leyes penales se establece el carácter delictivo de actos mencionados en tales convenciones o convenios y se disponen penalidades al respecto. Por ejemplo, la definición de los actos a que se hace referencia en el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo coincide en general con la definición que figura en el artículo 1 de la Ley No. 80 de 2002 contra el blanqueo de dinero y la definición del producto del delito que figura en el Convenio están de acuerdo con la definición de sumas recibidas que figuran en la Ley mencionada. El artículo 2 del Convenio, relativo al terrorismo y a la penalización de la financiación de actividades terroristas, se equipara a los artículos 86 y 86 bis de la Ley No. 97 de 1992, en virtud de la cual se modificó el Código Penal y el Código de Procedimientos en lo Criminal, y que se refiere también al secreto bancario y a armas y municiones (lo que se conoce como “ley contra el terrorismo”). Las medidas previstas en los artículos 8 y 18 del Convenio, además, están en gran medida en consonancia con los procedimientos previstos en la mencionada Ley contra el blanqueo de dinero. Todas estas leyes garantizan el cumplimiento de las disposiciones del Convenio.

1.4 El Comité contra el Terrorismo ha tomado nota de que Egipto ha pasado a ser parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y en tal sentido agradecería que Egipto le proporcionara información actualizada acerca de si las leyes nacionales de Egipto contienen disposiciones relacionadas con esta Convención.

Respuesta

En virtud de la Ley No. 80 de 2002 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales (Ley contra el blanqueo de capitales), enmendada por la Ley No. 78 de 2003, las disposiciones de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional ratificadas por Egipto fueron promulgadas en una ley. Los aspectos más importantes de la Ley contra el blanqueo de capitales son los siguientes:

En el artículo 1 de la Ley figura una definición de los términos técnicos utilizados en ella. Se definen los fondos que pueden ser objeto del blanqueo, su origen, las diversas instituciones financieras a las que se aplican las disposiciones de la Ley, las operaciones de blanqueo de capitales y otras partes conforme a la definición que figura en una decisión del Primer Ministro, independientemente de si las actividades especificadas en este artículo son realizadas por personas físicas o jurídicas.

El artículo 2 se refiere a las infracciones cuyo producto sea considerado delictivo y da una definición exhaustiva de los delitos previstos en las secciones 3, 4, 15 y 16 del libro II del Código Penal y los delitos de secuestro, cultivo de plantas narcóticas y fabricación de narcóticos, robo de fondos, desfalco, abuso de confianza, engaño, fraude, libertinaje y prostitución y los de la delincuencia organizada, previstos en las convenciones internacionales en la que es parte Egipto, cuando tales delitos sean punibles conforme a las leyes de Egipto y a la legislación extranjera, ya sea que esos delitos sean cometidos en su integridad o en parte en Egipto o en el extranjero.

El artículo 3 trata del establecimiento, en el Banco Central de Egipto, de un mecanismo de coordinación entre las diversas entidades que se ocupan de la lucha contra las operaciones de blanqueo de capitales, que se denominará Dependencia de lucha contra el blanqueo de capitales. El mismo artículo dispone que el Presidente de la República adoptará una decisión acerca de los sistemas operacionales y de gestión de la Dependencia y respecto de las cuestiones que considere oportuno encomendarle.

El artículo 4 dispone que las funciones de la Dependencia comprenderán la recepción de notificaciones de las instituciones financieras y la creación de una base de datos que contenga información sobre operaciones financieras sospechosas, además de intercambiar información y coordinar sus actividades con las autoridades de supervisión de otros países y organizaciones internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales.

El artículo 5 otorga a las personas que trabajen en la Dependencia, que serán designadas por una decisión del Ministro de Justicia, el carácter de funcionarios de aplicación de las leyes en relación con los delitos previstos en esta Ley.

El artículo 6 otorga a la Dependencia la facultad de solicitar a la Oficina del Fiscal General y a otras autoridades competentes la adopción de medidas precautorias conforme a las disposiciones de procedimiento del Código de Procedimiento Penal y las leyes que rigen las funciones de esas autoridades y que exigen a las autoridades de supervisión la verificación del cumplimiento por parte de las instituciones financieras de las disposiciones de la Ley y la presentación de informes sobre actividades financieras sospechosas.

Los artículos 8 y 9 establecen las obligaciones de las instituciones financieras enunciadas en la Ley respecto de la administración de los diversos tipos de cuentas de los clientes y el mantenimiento de registros de las operaciones financieras nacionales e internacionales. Además, tales instituciones deben mantener, por un período de cinco años desde la fecha de terminación de una operación o el cierre de una cuenta, según sea el caso, los registros y datos de los clientes y otros documentos necesarios a los fines de la cooperación con las autoridades competentes en la aplicación de las disposiciones de esta Ley. En la Ley también se contempla la evolución de los medios de almacenamiento de documentos y permite que las instituciones financieras conserven copias en microfilme durante todo ese período, siempre que se conserve el original.

El artículo 10 tiene por fin alentar la denuncia de operaciones de blanqueo de capitales eximiendo a las personas que realicen la denuncia u ofrezcan información y datos sobre operaciones financieras sospechosas de toda responsabilidad penal o civil, siempre que tal notificación se realice de buena fe y con fundamentos.

El artículo 12 permite el ingreso o la extracción de divisas del país, siempre que se declare su origen cuando el monto total supere el estipulado en este artículo.

Los artículos 14 y 15 de la Ley enuncian las sanciones previstas en caso de violación de sus disposiciones.

El artículo 16 trata de la responsabilidad de las personas jurídicas en relación con delitos cometidos en su nombre y provecho por alguno de sus empleados, con quienes esas personas deberán hacerse responsables en forma individual y solidaria respecto de las sanciones financieras que se impongan.

El artículo 17 de la Ley contiene una disposición por la que se exime de responsabilidad al autor de un delito que denuncie el delito y a los demás culpables a las autoridades encargadas de reunir pruebas o realizar investigaciones, antes de que dichas autoridades tengan conocimiento del hecho. También quedará exento de responsabilidad si realiza la denuncia después de que las autoridades hayan tomado conocimiento de los hechos y la información que proporcione conduzca a la detención de los otros autores del delito o al decomiso de los fondos derivados del delito.

Los artículos 18, 19 y 20 de la Ley enuncian los principios que rigen la cooperación entre las autoridades de Egipto y las autoridades judiciales del extranjero en la esfera de la lucha contra el blanqueo de capitales con arreglo a las convenciones bilaterales o multilaterales en las que Egipto es parte.

Mecanismos para la aplicación de la ley contra el blanqueo de capitales y medidas adoptadas a tal fin

El artículo 3 de la Ley dispone el establecimiento en el Banco Central de Egipto de una dependencia especial independiente de lucha contra el blanqueo de capitales, en la que estarán representadas las autoridades competentes. La Dependencia, que tendrá las responsabilidades y funciones previstas en la Ley, estará dotada de un número suficiente de expertos y especialistas en las esferas de aplicación de la Ley y de empleados que cuenten con los conocimientos y la capacidad necesarios. El Presidente de la República dictará un decreto relativo a la creación de la dependencia y las normas que rijan su gestión, funcionamiento y personal, lo que no necesariamente se ajustará a las normas y reglamentos aplicables al Gobierno, el sector público y el sector empresarial.

El Decreto Presidencial No. 164 de 2002, dictado de conformidad con el artículo 3 ya mencionado, estableció la Dependencia de lucha contra el blanqueo de capitales. En el artículo 2 del Decreto se dispone la formación de un Consejo de Síndicos de la Dependencia, presidido por un Ministro Auxiliar de Justicia elegido por el Ministro, e integrado por el Primer Vicegobernador del Banco Central, el Presidente de la Autoridad Rectora de los mercados de capitales, un representante de la Federación de Bancos de Egipto nombrado por la Federación y un experto en asuntos financieros y bancarios elegido por el Primer Ministro. El artículo dispone además que la formación de la Dependencia será promulgada por una decisión del Primer Ministro.

La formación de la Dependencia fue promulgada por Decisión del Primer Ministro No. 1599 de 2002.

El artículo 3 del mencionado Decreto Presidencial establece las responsabilidades del Consejo de Síndicos de la Dependencia para la gestión de sus actividades, el establecimiento de su política general y el seguimiento de la aplicación a fin de asegurar el logro de los objetivos de la Dependencia. El artículo 3 también expone las principales responsabilidades del Consejo en ese ámbito, a saber, adoptar los formularios necesarios para la aplicación de la Ley contra el blanqueo de capitales; suministrar los medios necesarios para la verificación del cumplimiento por las instituciones financieras de las normas y reglamentos establecidos por la ley en esta esfera; velar por que las autoridades judiciales y otras entidades responsables de la aplicación de la Ley contra el blanqueo de capitales reciban la información que soliciten; adoptar normas para el intercambio de información con órganos nacionales y del exterior; y crear sistemas y procedimientos para luchar contra el blanqueo de dinero en el país. El artículo 5 del Decreto dispone que el Presidente del Consejo de Síndicos se encargará de la supervisión y gestión de las actividades de la Dependencia. Le encomienda que se asegure de que la Dependencia desempeñe plenamente las funciones que se le han asignado; que mantenga contactos y adopte disposiciones respecto de sus actividades en los foros internacionales; e intercambie información con las autoridades competentes de otros países y con organizaciones internacionales, de conformidad con las disposiciones de tratados internacionales. El artículo 6 encomienda al Presidente del Consejo de Síndicos que prepare el informe anual que será presentado al Directorio del Banco Central de Egipto, en el que figurará un examen de las actividades de la Dependencia, las actividades internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la posición de Egipto al respecto. El artículo 7 dispone que la Dependencia se financiará con cargo al presupuesto del Banco Central de Egipto y a otros recursos privados, siempre que el presupuesto anual estimado del Banco Central de Egipto incluya la asignación de fondos apropiados para la Dependencia de conformidad con el presupuesto aprobado por el Consejo de Síndicos.

Por último, conforme a la Ley contra el blanqueo de capitales promulgada por Ley No. 80 de 2002, el Decreto Presidencial No. 164 de 2002 por el que se establece la Dependencia de lucha contra el blanqueo de capitales y el Decreto Presidencial No. 28 de 2003 relativo al funcionamiento y el personal de la Dependencia, y para aclarar las disposiciones de esas leyes y decretos, se promulgó un nuevo decreto del Primer Ministro (No. 951 de 2003). Las disposiciones de este Decreto, que contiene las normas de aplicación de la Ley contra el Blanqueo de Capitales se dividen en siete capítulos. El capítulo 1 enuncia las definiciones de los términos utilizados en la Ley. El capítulo 2 aclara las funciones y el mandato de la Dependencia de Lucha contra el Blanqueo de Capitales. El capítulo 3 se refiere al Consejo de Síndicos y la estructura orgánica de la Dependencia de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, en tanto los capítulos 4 y 5 se refieren a las autoridades de control y las instituciones financieras que deben establecer sistemas para la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley y aplicar los reglamentos y decretos de conformidad con el carácter de las actividades de esas instituciones. El capítulo 6 trata de la capacitación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y el capítulo 7 se refiere a la cooperación internacional en ese ámbito y prevé la cooperación judicial entre las autoridades judiciales de Egipto y sus homólogos del exterior para la lucha contra el blanqueo de capitales en todas sus formas, según lo expresado en el artículo 18 de la Ley, de conformidad con las normas establecidas en los tratados bilaterales y multilaterales en

los que Egipto es parte o, con el principio de reciprocidad (adición 5). De lo antes dicho se desprende que la Ley No. 80 de 2002 contra el blanqueo de capitales codifica todas las disposiciones que figuran en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Además de la Ley No. 80 de 2002 que codifica dichas disposiciones, diversas leyes de Egipto, anteriores a la Convención, contienen disposiciones similares a las de la Convención. Entre esas leyes cabe citar la Ley No. 54 de 1964 sobre la reorganización del control administrativo, enmendada por la Ley No. 112 de 1983 (adición 6); la Ley sobre ganancias ilícitas (No. 193 de 1951) y las enmiendas correspondientes (adición 7); la Ley sobre el órgano de investigaciones administrativas (No. 117 de 1958) y sus enmiendas (adición 8); la Ley sobre el órgano central de auditoría (No. 144 de 1988) (adición 9); y el Código Penal de Egipto que figura en la Ley No. 58 de 1937 (adición 10), cuyas disposiciones se ajustan a los principios establecidos de la jurisdicción penal internacional. Por cierto, los tribunales de Egipto tienen competencia para enjuiciar todos los delitos cometidos en el territorio de Egipto (jurisdicción *ratione loci*, o principio de territorialidad) independientemente de la nacionalidad del autor del delito o de la víctima (artículo 1 del Código Penal de Egipto). También compete a los tribunales de Egipto el enjuiciamiento de algunos delitos cometidos fuera del territorio del país, de conformidad con el principio de *ratione materiae* (párrafo 2 del artículo 2 del Código Penal de Egipto). Conforme al principio de jurisdicción penal internacional los tribunales de Egipto también tienen competencia, sobre la base del aspecto positivo del principio de *ratione personae*, para enjuiciar a los nacionales egipcios que cometan, fuera del territorio del país, un delito punible conforme a las leyes de ambos países (el Código Penal de Egipto y la legislación del país en el que se cometió el delito). A esto se le llama “doble criminalidad” (artículo 3 del Código Penal de Egipto).

1.5 El párrafo 1 de la resolución dispone que los profesionales que intervienen en operaciones financieras tengan la obligación legal de informar de las operaciones sospechosas. En tal sentido, el Comité contra el Terrorismo toma nota de que el párrafo c) del artículo 1 de la Ley No. 80 de 2002 contra el blanqueo de capitales define el término “instituciones financieras” con inclusión de diversas entidades y organismos que se ocupan de la gestión de recursos financieros y de otra índole pero que normalmente no realizan actividades bancarias ordinarias. No obstante, no resulta claro si la Ley se aplica a los profesionales, entre ellos los abogados. Por consiguiente, el Comité contra el Terrorismo agradecería que se aclarara si los abogados y otros profesionales tienen la obligación de denunciar las operaciones sospechosas a la Dependencia de Lucha contra el Blanqueo de Capitales conforme a la legislación de Egipto.

Respuesta

La Ley contra el Blanqueo de Capitales No. 80 de 2002 fue enmendada por la Ley No. 78 de 2003 (adición 11), que introdujo una nueva cláusula (11) en el texto del párrafo c) del artículo 1, que se refiere a la definición de instituciones financieras. Esta enmienda posibilita añadir otras personas, ya sea físicas o jurídicas, conforme a una decisión adoptada por el Primer Ministro. Además, el Código Penal que figura en la Ley No. 58 de 1937 establece la obligación general de todos los ciudadanos, y en consecuencia de los funcionarios y personas encargadas de prestar servicios públicos, de denunciar delitos en general, y en particular los estipulados en la mencionada Ley contra el Blanqueo de Capitales (adición 12).

1.6 El Comité contra el Terrorismo agradecería además que Egipto le facilitara alguna evaluación, en particular sobre medidas operativas, en relación con la aplicación de la resolución, que haya realizado alguna institución u organización internacional o regional.

Respuesta

Desde junio de 2001 el Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) ha estado realizando una evaluación en Egipto destinada a determinar el grado de adhesión del país a la aplicación de las recomendaciones del Grupo respecto de la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Egipto había sido incluido en la lista de países y territorios que no cooperaban, pero fue retirado de la lista en febrero de 2004, en vista de los cambios institucionales y prácticos introducidos en esa esfera. El informe del Grupo publicado en julio de 2004, trató con mayor detalle las novedades ocurridas en ese ámbito (adición XIII).

2. Asistencia técnica

2.1 El Comité contra el Terrorismo desea destacar una vez más la importancia que asigna a la prestación de asistencia y asesoramiento en relación con la aplicación de la resolución. En tal sentido, el Comité desea recordar a Egipto la Guía de fuentes de asistencia (www.un.org/sc/ctc), que se actualiza con frecuencia para incluir información nueva y pertinente sobre la asistencia disponible. El Comité agradecería recibir información de Egipto sobre las esferas en las que considera que puede beneficiarse de la asistencia o en las que podría estar en condiciones de prestar asistencia técnica a otros Estados en relación con la aplicación de la resolución.

Respuesta

Egipto acoge con beneplácito la asistencia técnica y el asesoramiento recibido de otros Estados en relación con todos los aspectos de la resolución 1373, a fin de optimizar el cumplimiento de la resolución, en particular en lo que respecta a las técnicas modernas de investigación y la interceptación y seguimiento de comunicaciones por la Internet y la utilización del correo electrónico, incluida la capacitación de las autoridades de aplicación de las leyes para la utilización de esas técnicas. Egipto agradecería que el Comité le informara acerca de la asistencia técnica que pueda recibir de otros Estados o instituciones internacionales en ese ámbito.

Respecto de la asistencia que puede ofrecer Egipto, el país está plenamente preparado para ofrecer la asistencia que sea necesaria en el contexto de las disposiciones de cooperación judicial y en materia de seguridad. Se comunicará al Comité toda disposición que se adopte en tal sentido.

2.2 El Comité desea seguir manteniendo un diálogo constructivo con Egipto en relación con las medidas que está adoptando para aplicar la resolución, en particular respecto de las esferas consideradas prioritarias. Si Egipto considera que podría ser provechoso analizar los aspectos de la aplicación de la resolución con el Director Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo, puede comunicarse con la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, según se indica en el párrafo 3.1 *infra*. Además, el Comité, por conducto de su Dirección Ejecutiva, puede comunicarse con las autoridades competentes de Egipto para analizar otras cuestiones relacionadas con la aplicación de la resolución.

Respuesta

En la etapa actual de aplicación de la resolución, no ha sido necesario recabar la asistencia de los expertos del Comité. No obstante, si fuera necesario recibir asesoramiento, nos comunicaremos con ellos de inmediato.

Publicado el 15 de marzo de 2005
